

El Gobierno remite hoy a Bruselas el plan presupuestario para 2019

INCERTIDUMBRE/ Bruselas tendrá que decidir si da 'luz verde' a los Presupuestos o reclama un mayor ajuste estructural. El PDeCAT amenaza con votar en contra si no hay "movimientos" del Ejecutivo.

P. Cerezal. Madrid

El Gobierno se reúne hoy en un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar el plan presupuestario de 2019, que tiene que remitir el mismo día a Bruselas para que lo evalúe la Comisión Europea. Este texto servirá de base para la elaboración del proyecto de Presupuestos que el Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere presentar en el Congreso a finales de noviembre o principios de diciembre.

El Gobierno ha esperado hasta la fecha límite marcada por Bruselas para enviar este plan presupuestario en el que se incluirán sus estimaciones macroeconómicas para 2019, sus previsiones de gasto e ingresos, así como las principales medidas y reformas que tiene previsto implementar de cara a dicho ejercicio. El plan tendrá como base el acuerdo cerrado el pasado jueves por el Gobierno y Unidos Podemos, que incluye medidas fiscales, de gasto social o de vivienda, entre otras.

Aunque la celebración de la reunión extraordinaria de este lunes no es obligatoria para la remisión del plan presupuestario, Moncloa busca dar el "aval" del Gobierno a las cifras económicas y, a la vez, poner de manifiesto el "compromiso inequívoco" del Ejecutivo con los socios europeos.



El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, y la ministra de Economía, Nadia Calviño

Bruselas espera saber si el objetivo de déficit del próximo año será el 1,3% del PIB que dejó fijado el Gobierno de Mariano Rajoy o el 1,8% que propone el Ejecutivo socialista, que no ha conseguido la aprobación en el Senado.

Por el momento, el acuerdo supone un incremento de gastos de 2.082 millones en el gasto sólo en la Administración central, a lo que habría

que sumar las subidas de pensiones y las mayores transferencias para las comunidades autónomas. Esta cifra supone uno de los grandes escollos para que Bruselas dé luz verde a los Presupuestos, ya que dificultaría la reducción del déficit tras el muy probable incumplimiento del objetivo este año. Por ello, es posible que el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, pida algún ajuste estructural adicional a los

5.678 millones en ingresos adicionales que espera recaudar el Gobierno con las subidas de impuestos anunciadas, sobre todo porque alguna de ellas tendría que haber entrado ya en vigor este año.

Incertidumbre

Pese a todo, la una gran incertidumbre que planea sobre los PGE no es tanto Bruselas como la debilidad parlamentaria del Gobierno. La vicepresidenta del PDeCAT y di-

Compromís reclama mayores inversiones en la Comunidad Valenciana para apoyar las Cuentas

putada en el Congreso, Míriam Noguera, advirtió ayer de que los ocho parlamentarios de su partido en la Cámara Baja –imprescindibles para el Gobierno– votarán *no* a los PGE “si no hay movimientos” por parte del Ejecutivo. “Votaremos *no*. Lo hemos dicho claramente. O hay movimientos (y movimientos no es una oferta) o no hay presupuestos”, señaló en Twitter.

Por su parte, Compromís –también necesario– dio su visto bueno al acuerdo pero planteó dos grandes exigencias para apoyarlas: unas inversiones en la Comunidad Valenciana equivalentes a su peso en el PIB español (el 10%) y que se compense el déficit fiscal de 1.350 millones que padece la región.

Finalmente, el presidente del PP, Pablo Casado, afirmó que el pacto entre el Gobierno “y su vicepresidente económico, Pablo Iglesias”, llevarían “al paro masivo de nuevo” y supondrían “la base de una nueva recesión”.

Banco Mundial:
“Debemos proteger a las personas, no los empleos”

Expansión. Madrid

El Banco Mundial aboga por incrementar la flexibilidad del mercado laboral para “proteger a las personas, no los empleos”. “Debemos proteger a las personas, no los empleos. Debemos animar a la gente a cambiar de sector, de regiones, alentar la movilidad, porque eso es bueno para la economía”, señaló ayer la nueva economista jefe de la institución, Penny Goldberg, en una entrevista con *Efe*.

Goldberg indicó que el actual debate en torno la globalización y sus ganadores y perdedores “es viejo”. “La novedad es que el debate se ha centrado ahora en los países avanzados, antes la crítica era desde los países en desarrollo”, explicó. Para Goldberg, eso “tiene que ver con el hecho de que aunque la economía global les va muy bien, la desigualdad ha crecido; pero no está claro que el comercio sea el único culpable, hay otros factores como la tecnología”. “La cuestión es que la liberalización del comercio puede haber sido positiva para unos países, pero hay comunidades que se ven dañadas”, remarcó. Por eso, subrayó que “tiene que haber una red de protección social lo suficientemente robusta para que la gente no se quede atrás y que estas regiones no desaparezcan del mapa”.

El Gobierno socava el diálogo con la empresa



LA ESQUINA

Miguel Valverde
mvalverde@expansion.com
@MiguelValverde4

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cometido muchos errores en su acuerdo presupuestario con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. Pero, quizás, se ha equivocado profundamente en una de las aristas del pacto: no haber contado con los empresarios para negociar la subida a 900 euros mensuales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), según ha reconocido Antonio Garamendi, presidente de Cepyme, la patronal de la pequeña y mediana empresa y probable presidente de CEOE, a partir del 21 de noviembre.

El pacto es un menosprecio a una de las partes del diálogo social y, por tanto, al sistema que tan buenos resultados ha dado para la convivencia social. El Gobierno ha incumplido el acuerdo que el Ejecutivo anterior cerró con los empresarios y los sindicatos para subir el sala-

rio mínimo, de manera paulatina, hasta los 850 euros mensuales en 2020. De golpe y porrazo, mediante el acuerdo con Podemos, Sánchez ha subido el SMI un 22%, de 736 a 900 euros mensuales. En términos anuales, la renta se eleva desde los 10.300 euros a los 12.600 euros. Por lo tanto, lo que es más importante para las empresas y para la creación de empleo en sí misma, el coste laboral mínimo, contando, entre otras cosas, con las cotizaciones sociales, ascenderá en 2019, desde los 13.500 euros a los 16.510 euros anuales. Todo ello, sin consultar con los empresarios que, en una economía de mercado libre como la española, son, por definición, los creadores de empleo.

En su pacto con Podemos, el Gobierno se ha embaulado algunas condiciones que había en el acuerdo con el Ejecutivo anterior. Entre ellas, que la economía debía crecer anualmen-

La deslealtad del Ejecutivo con la patronal en la subida del salario mínimo anima a los empresarios que desconfían del diálogo social

te un 2,5% para llegar a los 850 euros mensuales en 2020.

Es verdad que la subida del SMI afecta directamente a tan solo 600.000 trabajadores, pero puede repercutir de forma muy notable en la negociación colectiva. Indirectamente, puede forzar la subida de los salarios mínimos de convenio de muchas empresas. La proximidad de la renta que decide el Ejecutivo al salario mínimo de convenio incentivará las demandas sindicales.

Sin duda que Podemos, y los sindicatos, han metido un gol por toda la escuadra a los empresarios. Han hecho bien en aprovecharse de la debilidad parlamentaria del Gobierno, y del deseo del presidente de seguir utilizando los amplios resortes del poder para continuar su larga campaña electoral.

Sin embargo, con su deslealtad con CEOE y Cepyme el Ejecutivo socialista puede provocar movimientos en el mundo empresarial que no le convienen nada, si consigue mantenerse más allá de 2019. Primero, porque la subida de impuestos a las grandes empresas que recoge el acuerdo ha suscitado un enfado monumen-

tal en este colectivo. En segundo lugar, porque el gesto del Gobierno estimula las posiciones de los empresarios más liberales, dentro y fuera de CEOE. El acuerdo con Podemos da la razón a quienes piensan que el diálogo social no sirve para nada. Máxime, cuando Sánchez ha demostrado que las circunstancias económicas le importan un ardite si se trata de ganar apoyo electoral.

Juan Rosell y Antonio Garamendi tuvieron que vencer muchas resistencias internas para conseguir que el último acuerdo salarial con los sindicatos pudiera recoger crecimientos de hasta el 3% si, entre otras cosas, hay ganancias de productividad, creación de empleo o se reduce el absentismo laboral. Incluso, provocó un choque con el Círculo de Empresarios.

CEOE y Cepyme siempre han sido partidarias del diálogo social. Entre otras cosas, porque su presencia en el mismo muestra su representatividad ante la opinión pública. Igual que le ocurre a los sindicatos. Sin embargo, sus posiciones pueden endurecerse considerablemente ante la reforma laboral y de las pensiones que busca el Gobierno.